



**Rama Judicial del Poder Publico**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO SEXTO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08-001-33-33-006- <b>2017-00142</b> -00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Roberto Enrique Marín Padilla
Demandado	Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Juez	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

**I.- PRONUNCIAMIENTO**

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpuesta por el señor Roberto Enrique Marín Padilla contra la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

**II.- ANTECEDENTES**

**2.1 Demanda**

La parte actora pretende dentro del presente proceso pretende:

1.- Se inapliquen por inconstitucionales e inconstitucionales las siguientes normas: Artículo 23 Decreto 122 del año 1997, Artículo 29 Decreto 58 del año 1998, Artículo 30 del Decreto 062 del 1999, Artículo 30 del Decreto 2724 del año 2000, Artículo 29 del Decreto 2737 del año 2001, Artículo 29 del Decreto 745 del año 2002, Artículo 29 del Decreto 3552 del año 2003, Artículo 29 del Decreto 4158 del año 2004, Artículo 29 del Decreto 923 del año 2005, Artículo 29 del Decreto 407 del año 2006, Artículo 29 del Decreto 1515 del año 2007, Artículo 28 del Decreto 673 del año 2008, Artículo 27 del Decreto 737 del año 2009, Artículo 27 del Decreto 1530 del año 2010, Artículo 27 del Decreto 1050 del año 2011, Artículo 27 del Decreto 842 del año 2012, Artículo 27 del Decreto 1017 del año 2013, Artículo 27 del Decreto 187 del año 2014, Artículo 27 del Decreto 1028 del año 2015, Artículo 27 del Decreto 214 del año 2016, Artículo 27 del Decreto 984 del año 2017, Artículo 28 del Decreto 324 del año 2018.

2.- Se declare la nulidad de Resolución u oficio No. S-2017-056828/ ANOPA –GRUNO- 1.10 del 26 de diciembre del año 2017, mediante la cual se negó la reliquidación del salario del señor Roberto Enrique Marín Padilla, incluyendo el subsidio familiar en un 30% del salario básico por concepto de su esposa, un 5% del salario básico por concepto de su primer hijo, un 4% del salario básico por concepto de su segundo hijo, un

4% del salario básico por concepto de su tercer hijo, y un 4% del salario básico por concepto de su cuarto hijo.

3.- A título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación –Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional a reconocer y a pagar a mi poderdante la reliquidación del salario que devenga por parte de la Policía Nacional, donde se incluya la partida de Subsidio Familiar bajo los siguientes parámetros:

- a) En un 30% del salario básico, porcentaje que corresponde por su esposa, Luz Elena Lozano Pérez, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 04 de mayo del año 2009, fecha de matrimonio.
- b) En un 5% del salario básico, porcentaje que corresponde por su primer hijo, GIANMARCO MARIN LOZANO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 13 de marzo del año 2003, fecha de nacimiento.
- c) En un 4% del salario básico, porcentaje que corresponde por su segunda hija, MARIETTA DHAMAR MARIN CARO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 10 de abril del año 2006, fecha de nacimiento.
- d) En un 4% del salario básico, porcentaje que corresponde por su tercer hijo, ROBERTO CARLOS MARIN LOZANO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 28 de mayo del año 2010, fecha de nacimiento.
- e) En un 4% del salario básico, porcentaje que corresponde por su cuarto hijo, Juan José Marín Sánchez, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 10 de noviembre del año 2013, fecha de nacimiento.

4. A título de restablecimiento se condene a la Nación–Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional a pagar a mi poderdante los dineros retroactivos correspondientes a prestaciones, subsidios, aumentos anuales, o cualquier otro derecho causado, más la indexación que en derecho corresponda, incluyendo el subsidio familiar como factor salarial.

5. En el evento que mi poderdante se retire o sea retirado de la Policía Nacional, se incluya como factor prestacional el “Subsidio Familiar” en un 47% de su salario básico mensual, lo cual deberá constar en su hoja de servicios.

6. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código Contencioso Administrativo.

7. Condenar al demandado Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (SIC) la pagar al sr. Roberto Enrique Marín Padilla, los valores dejados de cancelar.

## **2.2 Hechos:**

El Despacho se permite sintetizar los hechos de la demanda así:

- El señor Roberto Enrique Marín Padilla ingresó de la Policía Nacional en el año 1994 como alumno. Luego de la aprobación del respectivo curso de formación, ascendió al grado de patrullero, y en consecuencia inició su vida laboral bajo el régimen denominado “Nivel Ejecutivo”.
- En su recorrido laboral y, bajo su esfera personal, contrajo nupcias con la señora Luz Elena Lozano Pérez, y así mismo, procreó a los menores Gianmarco, Marietta Dhamar, Roberto Carlos y Juan José.
- Al observar las diferencias salariales por concepto de subsidio familiar en la institución a la cual pertenece, presentó ante la Dirección General de la Policía Nacional solicitud para que se le re liquidara su salario mensual e incluyera la prima de subsidio familiar en los mismos porcentajes que se les reconoce al restante de uniformados de la institución.
- La Policía Nacional, mediante su delegado, expidió la Resolución u Oficio No. S-2017-056828/ANOPA –GRUNO-1.10 del 26 de diciembre del año 2017, por medio de la cual resolvió negar las pretensiones del petitorio extendido, sustentando su posición en las normas que actualmente gobiernan el régimen salarial y prestacional de los miembros del Nivel Ejecutivo.

## **2.3 Concepto de Violación**

El concepto de violación la parte actora, lo sustenta en los siguientes cargos:

El Decreto 0118 del 21 de junio 1957 fue la norma que implementó la figura jurídica del Subsidio familiar. En esa oportunidad la regulación normativa del subsidio familiar estuvo dirigida para el régimen general de seguridad social en Colombia, así como para algunos sectores públicos. Como se vislumbra en la norma comentada, el subsidio debía reconocerse a los trabajadores que tuviesen bajo su cargo hijos menores de 18 años.

De lo que se deduce con claridad que, el reconocimiento del subsidio familiar tenía como finalidad constitucional la protección de lo más importante de un estado social constitucional y democrático de derecho: la familia, pero además de ello, consideró que dicha protección económica debía circunscribirse en las personas que salarialmente estaban menos favorecidas, que la década de los noventa inició con el reconocimiento de la prima del subsidio familiar para todos los miembros de la Policía Nacional en igualdad de condiciones.

Manifiesta que los actos acusados vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que los oficiales perciben un salario mayor que los miembros del nivel ejecutivo, y aun así el reconocimiento del subsidio familiar es menor para los integrantes de esta última categoría, situación incongruente y que raya con el sistema constitucional colombiano.

Así como el derecho nacional e internacional a la protección del menor, transgrediendo el principio de progresividad y prohibición de retroceso.

## **2.4 Contestación de la Demanda**

La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, en su contestación se opuso a todas y cada una de las pretensiones manifestando que, el subsidio como prestación en los soldados había sido suprimido por el Decreto 3770 del 2009 que traía el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000 constituyéndose en regresiva, lo que para el caso de la carrera del Nivel Ejecutivo no se presenta tal situación, por cuanto constitucionalmente esta carrera se desarrolló conforme a lo prescrito en el artículo 218 de la carta Política, e igualmente si bien el personal de soldados tienen un menor ingreso frente a los demás rangos en el escalafón y que el subsidio familiar es un alivio como factor por estar en el sector menos favorecido, ello no ocurre con la carrera del nivel ejecutivo que es el caso que nos ocupa, por cuanto si observamos el salario básico de los uniformados del nivel ejecutivo, de acuerdo al rango de homologación de los suboficiales, ese salario definitivamente es muy superior a lo pretendido por el demandante.

Por lo tanto, la actuación administrativa se encuentra precedida de la presunción de legalidad, y deberá denegarse las súplicas de la demanda con fundamento en los argumentos señalados. No propuso excepciones

## **2.5 Actuación Procesal**

La demanda fue presentada el 14 de junio de 2019, correspondió por reparto a este juzgado el conocimiento del presente proceso, siendo inadmitida mediante auto de 11 de julio de 2019. Subsanas las falencias, con proveído calendado 16 de septiembre de 2019 se dispuso su admisión, ordenando la notificación correspondiente.

Vencido el término de traslado de la demanda, la parte demandada dio contestación sin proponer excepciones. Seguidamente con proveído de fecha 5 de agosto de 2021 se incorporaron las pruebas documentales allegadas y se fijó el litigio en el presente proceso. Ejecutoriada la decisión con auto de 19 de agosto del corriente, se ordenó la presentación de alegatos por el término de diez (10) días, los cuales se encuentran vencidos.

## **2.6 Alegaciones**

### **2.6.1 Parte Demandante:**

Como alegato el apoderado del actor reiteró lo expuesto en la demanda y el concepto de violación, trajo como fundamento varias sentencias de la Corte Constitucional y Consejo de Estado que a su criterio son aplicables al asunto en estudio. Haciendo un juicio integrado de igualdad, el cual solicita sea aplicado y realizado por el Juzgado.

Afirma que, la protección a la familia es un concepto que no solamente ha sido desarrollado por la Constitución Política de Colombia y las leyes nacionales, sino que, también se encuentra establecido en instrumentos internacionales.

### **2.6.2. Policía Nacional**

Reiteró lo expuesto en la contestación y precisó que, no se observa de qué manera las normas contenidas en el artículo 15 y parágrafo del artículo 49 del Decreto 1091 de 1995, parágrafo del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, y parágrafo del artículo 3 del Decreto 1858 de 2012, vulneren de manera flagrante la Carta, ni de ello se puede predicar prima facie incompatibilidad con sus superiores mandatos, en relación con la situación particular y concreta del actor, que lleve a la necesaria aplicación preferencial y directa de dicha norma superior.

Concluye que no existe certeza, que con el texto legal se genere un desconocimiento a los preceptos de la Constitución que luego se traduzca en vulneración de un derecho subjetivo de la parte actora, agregando que en relación con los cargos formulados y referidos a la presunta inconstitucionalidad de las disposiciones cuya inaplicación se pretende, existe pronunciamiento en sede del medio de control de nulidad emitido por el máximo órgano de lo contencioso administrativo, en el que cual, como se dejó expuesto en apartes anteriores, se abordó el estudio de los aspectos que se traen al proceso, específicamente en cuanto al derecho a la igualdad y principio de favorabilidad, decisión con efectos de cosa juzgada erga omnes, en los términos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011. Depreca se nieguen las pretensiones de la demanda.

## **2.7. Concepto del Ministerio Público**

La Procuradora judicial delegada para este despacho no rindió concepto alguno.

## **III. CONTROL DE LEGALIDAD**

No advirtiéndose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar la sentencia correspondiente.

## **IV.- CONSIDERACIONES**

### **4.1 Problema Jurídico**

El problema jurídico se contrae en determinar Si el demandante, en su calidad de patrullero de la Policía Nacional, tiene derecho a que la entidad demandada, dando prevalencia al derecho constitucional a la igualdad, le incluya dentro de la asignación básica mensual el subsidio familiar en un 30% por su esposa, 5% por su primer hijo, 4% por su segunda hija, 4% por su tercer hijo, 4% por su cuarto hijo, o si por el contrario, el acto administrativo acusado que negó esta pretensión se encuentra ajustado a derecho.

### **4.2 Tesis**

Se sostendrá la tesis que, el demandante se encuentra cobijado por las previsiones contenidas en el Decreto 1091 de 1995, artículos 16 y 17, y en consecuencia los valores a pagar por concepto de subsidio familiar son los establecidos en los Decretos anuales de sueldos fijados por el Gobierno Nacional. Pues se vinculó a la Policía Nacional como parte del Nivel Ejecutivo, categoría que ostenta a la fecha, por lo que no es dable reconocer el subsidio familiar en los porcentajes pretendidos.

### **4.3. Marco Normativo y Jurisprudencial**

#### **4.3.1 Del régimen salarial de los miembros ejecutivo de la Policía Nacional**

El artículo 216 de la Carta Política determinó que la Fuerza Pública está compuesta en forma exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Área y Armada) y la Policía Nacional; establecidas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional y del orden Constitucional.

Por su parte, el artículo 218 ibidem, señaló que la Ley organizará el cuerpo de Policía, y determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. Así, el Legislador expidió la Ley 4 de 1992, y en sus artículos 1, literal d); 2° literal a); y 10°, dispuso que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos señalados en esta norma, fijaría el régimen salarial y prestacional, entre otros de los Miembros de la Fuerza Pública. Posteriormente con la Ley 62 de 12 de agosto de 1993, se creó un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República, Con fundamento en el numeral 1° del artículo 35, se expidieron los Decretos Nos. 41 de 10 de enero de 1994 y el 262 de 31 de enero de 1994, mediante los cuales se modificaron las normas de carrera del personal de Agentes y suboficiales de la Policía Nacional, sin embargo la Corte Constitucional declaró

inexequible las expresiones "nivel ejecutivo", "personal del nivel ejecutivo" y "miembro del nivel ejecutivo" contenidos en el Decreto No. 41 de 1994, en la medida que la Ley 62 de 1993, no hizo referencia a dicho nivel, por lo que, se evidenció un exceso en las facultades otorgadas al Ejecutivo.

El artículo 1° de la Ley 180 de 13 de enero de 1995, modificó el artículo 6° de la Ley 62 de 1993, de la siguiente manera: "*La Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley.*" Adicionalmente, la norma en comento en el artículo 7° le confirió facultades extraordinarias al presidente de la República con el objeto de regular aspectos como la asignación salarial, primas y prestaciones sociales del Nivel Ejecutivo, disponiendo en el parágrafo: "*La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo,*"

Con fundamento en las precitadas facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 132 del 13 de enero de 1995, por el cual se desarrolló la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que dispuso: i) *el personal de suboficiales y agentes, que se encontraba en servicio activo a la fecha de promulgación de ese Decreto, podían solicitar su ingreso al Nivel Ejecutivo previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos (arts. 12 y 13 );* que ii) *el personal que ingresara al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional debía someterse al régimen salarial y prestacional determinado por el Gobierno Nacional (art. 15 )* y iii) *que el ingreso al Nivel Ejecutivo bajo ninguna circunstancia podía discriminar o desmejorar las circunstancias de quienes ya venían vinculados a la Policía Nacional (art. 82 )*

Con posterioridad, el Presidente de la República a través del Decreto 1091 de 1995 expidió el régimen de asignaciones y prestaciones del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Seguidamente mediante el Decreto Ley 1791 de 2000 se dispuso, que los suboficiales y agentes de la Policía Nacional i) podían ingresar a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo y ii) que, en todo caso, el referido personal estaría sometido al régimen salarial y prestacional establecido para el Nivel Ejecutivo.

En este punto no sobra advertir que la Corte Constitucional en sentencia C-691 de 2003 declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 10 del Decreto Ley 1791 de 2000, relativo al régimen salarial y prestacional aplicable al personal de suboficiales y agentes de la Policía Nacional incorporados al Nivel Ejecutivo, al considerar que dicha previsión normativa: "*no constituía una modificación al régimen salarial y prestacional de los miembros de la Policía Nacional, sino que se limitaba a señalar cuál sería el régimen*

aplicable en el evento de que los suboficiales y agentes aspiren a ingresar al Nivel Ejecutivo y sean efectivamente aceptados”.

#### **- Del subsidio familiar**

El Decreto 1212 de 1990 por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional" consagró en su artículo 82 el subsidio familiar para los oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, así:

*A partir de la vigencia del presente Decreto los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:*

*a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo.*

*b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlos, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. Del presente artículo.*

*c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).*

*PARAGRAFO 1o. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a los Oficiales y Suboficiales que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.*

*PARAGRAFO 2o. La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar, deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.*

A su vez, el Decreto 1213 de 1990 reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional prevé el subsidio familiar para los Agentes de la policía Nacional, así:

*Artículo 46. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:*

*a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo.*

*b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlos, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo.*

*c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).*

*PARÁGRAFO 1°. El límite establecido en el literal C. de este artículo no afectará a los agentes que, por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuviesen disfrutando, o tuviesen derecho a disfrutar de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.*

*PARÁGRAFO 2°. La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar, deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.*

En las anteriores condiciones se puede inferir que, al interior de la Policía Nacional, existen diferentes regímenes salariales y prestacionales contentivos de ciertas partidas específicas para los Oficiales y Suboficiales, Agentes y miembros del Nivel Ejecutivo



(creado posteriormente a la expedición de las citadas normas), sin que esta circunstancia constituya un trato diferenciador injustificado ni mucho menos un desconocimiento del derecho a la igualdad.

Con el Decreto Reglamentario 1091 de 1995 se le confirió al Nivel Ejecutivo de Policía Nacional (creado con Ley 180 de 1995) devengar el subsidio familiar durante el servicio activo, en los siguientes términos:

**«Artículo 15. Definición.** *El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a cargo y de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia. Esta prestación estará a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.*

**Parágrafo.** *El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso*

**Artículo 16. Pago en dinero del subsidio familiar.** El subsidio familiar se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo. El Gobierno Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo.

## **V. CASO CONCRETO**

### **5.1 Hechos Probados**

-. Del extracto de la hoja de vida expedida el 20 de octubre de 2018 se puede establecer<sup>1</sup>:

1.- Que el demandante inició la actividad policial como alumno el 1 de agosto de 1994 por un tiempo 11 meses 29 días y como agente del nivel ejecutivo desde 1 de agosto de 1995 y para la fecha de la expedición del extracto del 20 de octubre de 2018 tenía un servicio prestado de 24 años dos meses dieciocho días.

2.-Con oficio S.2017-056828-/ANOPA-GRUNO 10.0 de 26 de diciembre de 2017 se dio respuesta a petición con radicado 129537 del 7 de diciembre de 2017, en la cual se negó la solicitud de pago del subsidio familiar conforme a los decreto 1212 y 1213 de 1990, comoquiera que la norma por el cual está regido el pago de dicho emolumento es el decreto 1091 de 1995 y la Policía nacional no está facultada para realizar reconocimiento salariales y prestacionales que no estén contemplado en las disposiciones legales que regulan la materia.

-. El demandante tiene cuatro (4) hijos Juan José Marín Sánchez nacido el 10 de noviembre de 2013<sup>2</sup>, Roberto Carlos Marín Lozano nacido el 28 de mayo de 2020<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Extracto de hoja de vida del señor Roberto Marín allegada como anexo de la demanda.

<sup>2</sup> Registro civil de nacimiento del menor allegado como prueba con la demanda, digitalizado consistente en 1 folio

<sup>3</sup> Registro civil de nacimiento del menor, allegado como prueba con la demanda, digitalizado consistente en 1 folio.

Marietta Dhamar Marín Caro nacida el 10 de abril de 2006<sup>4</sup>, Gianmarco Marín Lozano nacido el 13 de marzo de 2003<sup>5</sup>. Información acreditada con los registros civiles allegados como prueba.

-. Para octubre de 2018 el actor recibió como emolumento salarial el subsidio familiar en cuantía de \$125.276.00, de acuerdo a desprendible de pago de esa mensualidad.

## **5.2 Análisis Crítico de las Pruebas Frente al Marco Jurídico**

Con fundamento en las normas y jurisprudencia previamente expuestas, el Despacho advierte que el patrullero Roberto Enrique Marín Padilla, al momento de la presentación de la presente demanda prestaba su servicio a la Policía Nacional, por lo que pretende se reconozca el subsidio familiar en la cuantía señalada en los decretos 1212 y 1213 de 1990 y se inapliquen las normas emitidas por el Gobierno Nacional que fijan el valor del subsidio familiar, en cumplimiento del artículo 15 del decreto reglamentario 1091 de 1995, toda vez que, dicha diferencia normativa atenta contra su derecho a la igualdad y principio de progresividad de normas laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de la pretendida prestación económica.

Como se indicó en el marco normativo con el Decreto Reglamentario 1091 de 1995 le confirió al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional la posibilidad de devengar el subsidio familiar durante el servicio activo, *en proporción al número de personas a cargo y de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, así la cuantía para el pago en dinero del subsidio familiar por personas a cargo es determinada por el Gobierno Nacional.*

En principio es menester señalar que el subsidio familiar es un mecanismo de redistribución del ingreso, que se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento<sup>6</sup>. Siendo como tal una ayuda o beneficio que se da al trabajador para ayudar a su carga familiar.

La jurisprudencia constitucional<sup>7</sup> ha señalado que la naturaleza del subsidio familiar se caracteriza por una triple condición, a saber: (i) una prestación social legal de carácter laboral, que se deriva del contrato de trabajo; (ii) un mecanismo de redistribución del ingreso; y (iii) una prestación propia del régimen de seguridad social desde la óptica de la prestación del servicio.

<sup>4</sup> Registro civil de nacimiento del menor, allegado como prueba con la demanda, digitalizado consistente en 1 folio

<sup>5</sup> Registro civil de nacimiento del menor, allegado como prueba con la demanda, digitalizado consistente en 1 folio

<sup>6</sup> Sentencia C-508 de 1997, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

<sup>7</sup> Sentencia C-508 de 1997, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Frente a esta prestación el actor señala la existencia de dos regímenes para los suboficiales y oficiales y el nivel ejecutivo de la Policía que vulnera el principio constitucional de igualdad pues el valor determinado en cada uno son disimiles, teniendo en cuenta que siendo una prestación de ayuda a la carga familiar para trabajadores con ingresos precarios, los agentes de nivel de oficiales y suboficiales cuyo ingreso son superiores se les reconoce mayor valor por esta prestación que a los de nivel ejecutivo.

Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política no proscribe ni elimina la posibilidad que el legislador contemple regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando la diferencia se ajuste a los preceptos constitucionales. Así las cosas, en el evento en el que existan distintos regímenes salariales y prestacionales, a efectos de verificar una eventual vulneración del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha señalado que cada régimen salarial especial, no puede ser valorados de manera aislada, esto es, deben ser confrontados con otros regímenes, pero en su conjunto, verificando en cada caso, si existe alguna diferencia y si esta a su vez puede ser compensada con otro tipo de factores. En este escenario, se evidencia con claridad que se trata de sujetos que no tienen la misma naturaleza pues obedecen a situaciones de hecho distintas, si bien ambos grupos pertenecen a la Policía Nacional, lo cierto es que, cada uno hace parte de categorías diferentes jurídicamente y que responden a una naturaleza funcional distinta, teniendo responsabilidades y tareas diferentes, así como sus prestaciones las cuales son reguladas por normas diferentes<sup>8</sup>.

En un juicio de igualdad<sup>9</sup> realizado por el Consejo de Estado<sup>10</sup>, entre los regímenes de nivel ejecutivo y suboficiales y oficiales de la Policía Nacional, frente al pago del subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro, indicó, que:

*La diferencia de trato se encontraba justificada, debido a que la norma superior no elimina la posibilidad de que «el legislador contemple regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferencia se ajuste a los preceptos constitucionales», en el presente caso el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional fue creado por la Ley 180 de 1995 como un nuevo nivel en la institución, diferente al de los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública, con un sistema de ingreso y ascenso, así como unas funciones, responsabilidades y régimen salarial y prestacional propios; a diferencia del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que, a la fecha de creación de este nuevo nivel, se regían por el Decreto 1212 de 1990,posteriormente derogado por el Decreto 41 de 1994.*

<sup>8</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-006 de 2017

<sup>9</sup> Para hacer el juicio de igualdad o proporcionalidad, indicó que se tiene 3 etapas : «(i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, Sentencia

<sup>10</sup> **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Demanda acumulada rad. 110010325000201400186-00 (0444-2014) y 110010325000201401554-00 (5008-2014) de 25 de noviembre de 2019 Mp Sandra Liseth Ibarra Velez.**

*En tal sentido, es incongruente con un verdadero estatuto de carrera que el personal del Nivel Ejecutivo, que está en una categoría inferior a la de los suboficiales, tenga un régimen salarial más benéfico que quienes se encuentran en el grado inmediatamente superior. Lo lógico es que el personal que ocupe los cargos más elevados, inclusive el más alto de la institución, reúna los requisitos académicos y de experiencia exigidos por el ordenamiento jurídico.*

De lo expuesto, concluyó que en esta oportunidad no se cumple con el primer presupuesto del test de igualdad, esto es, que los supuestos de hecho sean susceptibles de compararse. Por lo tanto, ante regímenes tan disímiles no era procedente continuar con el estudio de las demás etapas del mencionado test, comoquiera que, para la prosperidad de un juicio de igualdad se precisa la existencia de supuestos o situaciones que objetiva, material y funcionalmente sean equiparables, a fin de establecer «*qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato diferenciado*»

Así para el caso en estudio, en el cual el actor pretende un trato igual o la aplicación de normas del régimen oficial y suboficiales con fundamento en el principio de igualdad, se considera claramente aplicable los argumentos y fundamentos expuestos en el análisis realizado por el Consejo de Estado, en desarrollo de test de igualdad o de proporcionalidad. Encontrando que, la diferencia en los regímenes está plenamente justificada y por ende el acto administrativo demandado no trasgrede el principio de igualdad, así como tampoco las normas cuya inaplicación pretende, como quiera que son expedida con fundamento en las normas vigentes.

De otra parte, el actor, aduce con la expedición al acto acusados y con las normas cuya inaplicación pretende, la violación del principio de progresividad y no regresividad. En la misma sentencia, el Consejo de Estado estudió el mencionado cargo y frente al subsidio familiar, con fundamento en la sentencia Corte Constitucional<sup>11</sup>, señaló:

*En efecto, si bien en el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no se contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras, y el monto del subsidio familiar fue reducido; no obstante, ello, de por sí, no implica que el régimen al que se acogió le haya sido desfavorable, pues la comparación entre uno y otro no se puede hacer en forma aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores prestacionales, bonificaciones o auxilios, sino que es necesario verificar la existencia de una desmejora en la generalidad de componentes que integran su remuneración, dentro de la cual está incluida la asignación básica mensual que fue el principal elemento diferencial entre uno y*

---

<sup>11</sup> Una simple lectura de la norma permite observar cómo ella no está modificando el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Policía Nacional, sino que se limita a señalar cuál será el régimen aplicable en el evento en que los suboficiales y agentes aspiren a ingresar al nivel ejecutivo y sean efectivamente aceptados.

La regulación prevista en el párrafo acusado no hace más que desarrollar las normas de carrera del nivel ejecutivo, según lo autorizado por el Congreso, al indicar una consecuencia apenas obvia en caso de cambio de un nivel jerárquico a otro dentro de la propia institución, pero en nada altera las condiciones de remuneración o los beneficios económicos y asistenciales de los agentes, suboficiales e incluso del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Se trata, como bien lo sugiere uno de los intervinientes, de una precisión relacionada con los efectos jurídicos derivados de una movilidad interna pero que mantiene inalterados los diferentes regímenes salariales y prestacionales de los miembros de la institución

oncluye que no se presentó una «regresión» en materia laboral respecto de los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, toda vez que desde su creación, cuenta con un régimen salarial y prestacional propio. En tal medida no se da un desconocimiento de los principios de favorabilidad, condición más beneficiosa y progresividad, pues atendiendo al principio de inescindibilidad, no podía el Gobierno Nacional tomar los aspectos favorables de cada régimen para su creación.

*otro régimen, y el motivo por el cual los agentes y suboficiales de la Institución se acogieron a la homologación.*

*En otras palabras, este desmejoramiento no puede mirarse aisladamente o factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de las normativas en estudio (en este caso, el de los Suboficiales - Decreto 1212 de 1990, por un lado; y, el del Nivel Ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro).*

*Además, en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del Nivel Ejecutivo a la que se acogió libremente el demandante debe aplicarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa (Decreto 1091 de 1995) existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de Suboficial y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual su condición de integrante del Nivel Ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales.»*

Quiere decir lo anterior, que, si bien en el régimen salarial del nivel ejecutivo el subsidio familiar fue reducido, ello, no implica que el régimen sea desfavorable, pues la comparación entre uno y otro no se puede hacer en forma aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores prestacionales, bonificaciones o auxilios. Teniendo en cuenta que, en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del Nivel Ejecutivo escogida debe aplicarse en su integridad.

En esa medida se puede concluir, que el actor se encuentra cobijado por las previsiones contenidas en el Decreto 1091 de 1995- artículos 16 y 17, y en consecuencia los valores a pagar por concepto de subsidio familiar son los establecidos en los Decretos anuales de sueldos fijados por el Gobierno Nacional, pues se vinculó a la Policía Nacional como parte del Nivel Ejecutivo, categoría que ostenta a la fecha.

Por lo tanto, es claro que, no le asiste el derecho a percibir el subsidio familiar en los porcentajes establecidos en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, sin que pueda decirse que tal circunstancia se constituya en una violación del derecho a la igualdad, o al de progresividad pues se itera, los beneficiarios de cada régimen (oficiales, suboficiales, agentes y nivel ejecutivo) a pesar de pertenecer a la misma institución, en relación con las partidas computables en la asignación básica, se encuentran en situaciones diferencial teniendo en cuenta las diferentes categorías de jerarquía, la naturaleza de sus funciones y además que cada personal realiza cotizaciones sobre diferentes partidas, lo que justifica la diferencia en sus regímenes prestacionales.

En consecuencia, no es dable para el juzgado reconocer al señor Roberto Enrique Marín Padilla, el subsidio familiar en un 30% por su esposa, 5% por su primer hijo, 4% por su segunda hija, 4% por su tercer hijo, 4% por su cuarto hijo.

## **VI. COSTAS**

Este Despacho se abstendrá de condenar en costas, a la parte vencida por cuanto no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tales como, temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

### **FALLA**

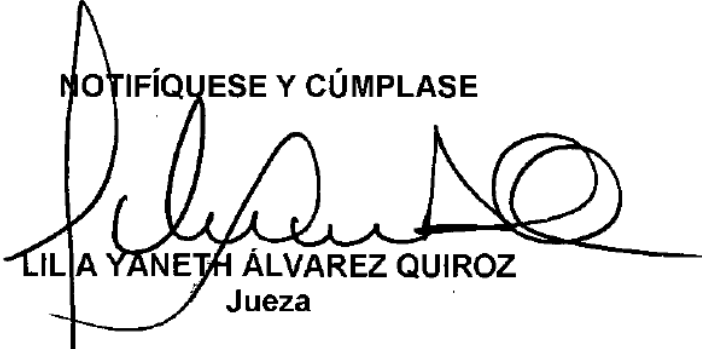
**PRIMERO: DENIÉGUESE** las súplicas de la demanda, por las razones expuesta en la parte considerativa de la presente providencia

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** personalmente el presente fallo a la señora Procuradora Delegada del Ministerio Público ante este juzgado.

**CUARTO:** Ejecutoriada esta sentencia ARCHÍVESE el expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**  
Jueza

P/KS